Tejidos Sociales, 7(1): pp. 1-10; enero-diciembre 2025

Comprender para transformar: Cartografía social e IAP en la prevención de la violencia juvenil y construcción de paz territorial*

Understanding to transform: Social cartography and par in preventing youth violence and building territorial peace

Shirley Dams Delgado Orozco
Universidad Simón Bolívar, Sede Barranquilla-Colombia

Laura Piña Díaz
Universidad Simón Bolívar, Sede Barranquilla-Colombia

Mayra Alejandra García Márquez
Universidad Simón Bolívar, Sede Barranquilla-Colombia

Roxana María Villacob Vides
Universidad Simón Bolívar, Sede Barranquilla-Colombia

Nashel Karinne Centeno Tamayo
Universidad Simón Bolívar, Sede Barranquilla-Colombia

Raúl de Jesús Oñoro Acosta
Líder Social, Municipio de Galapa-Colombia

ARTÍCULO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN
Copyright ©Tejidos Sociales

Recibido: 25-10-2025
Aceptado: 07-11-2025
Publicado: 10-11-2025

Autor de correspondencia:
shirley.delgado@unisimon.edu.co

Resumen

El artículo sistematiza los hallazgos del proceso de cartografía social realizado en el municipio de Galapa (Atlántico) en el marco del programa *Jóvenes por la Paz*, con el propósito de comprender las dinámicas que inciden en la violencia juvenil y fortalecer estrategias de convivencia y cultura de paz. El estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo y bajo la metodología de Investigación-Acción-Participativa (IAP), que integró la producción de conocimiento con la acción comunitaria. A través de entrevistas, grupos focales y ejercicios de mapeo colectivo en siete barrios priorizados, se identificaron factores de riesgo asociados a la fragilidad de los vínculos familiares, la deserción escolar (33,9%) y el consumo de alcohol (50,4%), este último documentado como un detonante de conductas violentas y reflejo de carencias socioeconómicas y afectivas. Entre los factores protectores sobresalieron el liderazgo juvenil, la participación de iglesias, centros educativos y redes barriales. La cartografía social se consolidó como una herramienta metodológica y política para el fortalecimiento del tejido comunitario, la apropiación territorial y la articulación entre Estado y ciudadanía. Los resultados evidencian que la prevención de la violencia juvenil requiere estrategias integrales,

* Este artículo es resultado de un ejercicio académico desarrollado entre la Especialización en Procesos de Intervención Social y el programa *Jóvenes por la Paz* de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Galapa.

sostenibles y participativas orientadas a la construcción de paz territorial.
Palabras clave: Cartografía social, Cultura de paz, Galapa, IAP, Investigación cualitativa, Violencia juvenil.

Abstract
This article systematizes the findings of the social mapping process carried out in the municipality of Galapa (Atlántico) within the framework of the Youth for Peace program, aimed at understanding the dynamics underlying youth violence and strengthening strategies for coexistence and a culture of peace. The study was developed through a qualitative approach based on Participatory Action Research (PAR), integrating knowledge production with community action. Through interviews, focus groups, and collective mapping exercises conducted in seven prioritized neighborhoods, risk factors were identified, including fragile family ties, school dropout (33.9%), and alcohol consumption (50.4%)—the latter documented as a trigger for violent behavior and a reflection of socioeconomic and emotional deprivation. Protective factors included youth leadership, the participation of churches, educational centers, and neighborhood support networks. Social mapping proved to be both a methodological and political tool that strengthened community ties, territorial appropriation, and coordination between the State and civil society. The results show that preventing youth violence requires comprehensive, sustainable, and participatory strategies that promote territorial peacebuilding and social transformation.

Keywords: Social cartography, Culture of peace, Galapa, Participatory Action Research (PAR), Qualitative research, Youth violence.

Introducción

La violencia juvenil constituye uno de los principales desafíos sociales en América Latina, siendo reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte en adolescentes (OPS & OMS, 2022). En el contexto colombiano, los procesos de exclusión social, la precariedad educativa y la limitada presencia institucional han favorecido la emergencia de dinámicas violentas en entornos urbanos y semiurbanos, afectando de manera directa a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Diversos estudios respaldan esta afirmación. Por ejemplo, Aguilar-Forero y Muñoz González (2015) señalan que "la condición juvenil está atravesada por toda clase de adversidades asociadas a la precariedad económica y vital, a la incertidumbre frente al futuro, al desencanto y a las violencias…" (p. 1022). De igual forma, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe evidencia que los homicidios suelen afectar de manera desproporcionada a las poblaciones más pobres, especialmente en zonas rurales con débil presencia estatal, fuertes economías ilícitas y comunidades fronterizas. Asimismo, se

reconoce que la mayoría de las víctimas de homicidio en América Latina y el Caribe son hombres jóvenes, aunque no todos enfrentan el mismo nivel de riesgo: la violencia letal tiende a concentrarse en barrios urbanos caracterizados por exclusión social, desigualdad y falta de oportunidades (PNUD, 2021, p. 229).

El informe también señala que las minorías étnicas sufren un riesgo mayor de victimización letal y que las personas con niveles educativos bajos particularmente aquellas con educación primaria o secundaria reportan con más frecuencia la presencia de violencia entre pandillas en su entorno, a diferencia de quienes tienen educación superior (PNUD, 2021, p. 229). En conjunto, estos hallazgos reflejan cómo la desigualdad actúa como un factor estructural de la violencia, al reproducir condiciones de vulnerabilidad entre los jóvenes y los sectores más pobres.

En síntesis, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD plantea que la violencia no solo constituye una expresión de las desigualdades sociales, sino que también las profundiza. Las personas y comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad por bajos ingresos, limitada representación política o escaso acceso a servicios básicos son las más expuestas a las distintas formas de violencia, especialmente en territorios con débil presencia estatal. En consecuencia, la violencia actúa como un factor que amplía las brechas existentes al afectar con mayor severidad a quienes ya se encuentran en desventaja, reproduciendo y acentuando las desigualdades en múltiples dimensiones del desarrollo humano (PNUD, 2021, p. 230).

Lo anterior, evidencia la centralidad de la debilidad institucional en contextos de violencia estructural. En esta misma línea, Pérez Espitia (2019), al analizar las juventudes rurales, muestra que las condiciones de vida de estos jóvenes están marcadas no solo por la violencia armada y económica, sino también por imaginarios sociales que justifican su exclusión o promueven formas de inclusión subordinada. Aun en tales contextos adversos, los jóvenes rurales construyen contra-conductas y formas de acción política propias, evidenciando su capacidad de agencia frente a un orden social que históricamente los ha desconocido (p. 22).

Desde un enfoque interdisciplinar, diversos estudios han abordado este fenómeno desde perspectivas sociológicas, psicológicas y comunitarias, destacando la importancia de comprender las condiciones estructurales que lo sustentan y las alternativas posibles para su transformación desde la intervención social. En este sentido, la revisión de experiencias locales y programas de prevención se vuelve fundamental para fortalecer estrategias de convivencia y construcción de paz en los territorios, desde un pensar situado que reconozca los lazos culturales e históricos propios de cada comunidad.

Como plantea Carballeda (2013), "la intervención en lo social se asienta en una forma de comprender desde el Otro, entendiéndolo no sólo como presente en acto sino como un sujeto en movimiento histórico-social" (p. 3). De igual modo, el autor sostiene que "el pensar situado en términos de intervención social implica un nuevo diálogo con el territorio, con la cultura y el sujeto de intervención" (p. 2), lo cual resulta especialmente relevante para comprender los procesos sociales en América Latina, marcados por profundas desigualdades, fragmentaciones sociales y nuevas expresiones de exclusión.

En este sentido, desde la comprensión de la violencia juvenil como un fenómeno estructural, arraigado, resulta indispensable reconocer el papel de las políticas públicas como mecanismos de respuesta del Estado frente a estas problemáticas. Es así, las políticas sociales se configuran como expresiones de un esfuerzo institucional orientado a la transformación de

condiciones estructurales y a la reconstrucción del tejido social, objetivos que se materializan en programas y estrategias territoriales de intervención.

Siguiendo a Carballeda (2013), la intervención debe situarse en el cruce entre las demandas sociales emergentes y las acciones institucionales de respuesta, articulando la comprensión del territorio, la cultura y el sujeto de intervención con las políticas y programas del Estado. De ahí que las políticas de juventud y de paz en Colombia no solo representen instrumentos de gestión pública, sino también espacios de mediación social y construcción de ciudadanía.

En el marco de las políticas orientadas a la "paz total", la actual administración nacional ha impulsado una arquitectura institucional centrada en la transformación de los territorios y la atención a poblaciones históricamente vulneradas. El Programa de Gobierno 2022–2026 "Colombia Potencia de la Vida Mundial" incluye la línea estratégica 5.2 "Colombia hacia una cultura de paz", la cual promueve la consolidación de ciudadanías activas, la prevención de la violencia y la creación de entornos protectores para niños, niñas y jóvenes. Complementariamente, el Programa Nacional Jóvenes en Paz busca fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana mediante acciones focalizadas en jóvenes en riesgo, priorizando la inclusión social, el acceso a oportunidades educativas y laborales, y la reconstrucción de la confianza institucional.

A nivel subnacional, el Plan de Desarrollo Departamental "Atlántico para el Mundo 2024–2027" establece en su eje 1.7 "Prevención de la delincuencia y acciones para la paz total" la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones, comunidades y organizaciones juveniles para reducir la violencia y promover la convivencia pacífica. Esta orientación se refleja a nivel local en el Plan de Desarrollo Territorial de Galapa "Galapa Tierra de la Esperanza 2024–2027", específicamente en su Artículo 43°, Estrategias del Sector Gobierno Territorial Participación Ciudadana y Respeto por los Derechos Humanos. En este se reconocen los desafíos sociales que afectan la convivencia, tales como "la pobreza, el desempleo, la discriminación, el machismo y las violencias contra mujeres, niños y jóvenes, la deserción escolar y falta de acceso a la educación media y superior y la intolerancia" (p. 214). Frente a ello, el plan propone la construcción de una comunidad participativa y solidaria, comprometida con el respeto por los derechos humanos y la prevención de las violencias.

En coherencia con este enfoque, el plan plantea dentro de su línea estratégica Tierra Segura el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, la garantía del acceso a la justicia, la prevención y control de los delitos, así como el apoyo a la creación de espacios para jóvenes en el municipio. Estas acciones buscan promover una cultura de paz, civismo y corresponsabilidad, que contribuya al fortalecimiento de la convivencia y a la consolidación de instituciones sólidas (p. 215).

Asimismo, el documento establece como meta "impulsar acciones que permitan generar una cultura de paz y convivencia para la reducción de conflictividades sociales" (p. 217), reafirmando el compromiso municipal con la promoción de la paz y el desarrollo social sostenible.

En coherencia con este marco, el municipio de Galapa, a través de la Secretaría de Gobierno (2025), implementa el programa "Jóvenes por la Paz" desde la política de seguridad y convivencia ciudadana, concebido como una estrategia integral de prevención de la violencia y promoción de la cohesión social. Esta iniciativa busca consolidar espacios de participación juvenil, fortalecer capacidades comunitarias y fomentar el sentido de pertenencia territorial. Una de las herramientas centrales del programa es la cartografía social, entendida como un proceso participativo que permite a los jóvenes identificar, representar y analizar los factores

de riesgo y las potencialidades de su territorio, generando conocimiento colectivo y fortaleciendo la apropiación comunitaria del espacio.

Desde la perspectiva de la intervención situada desde la mirada de Carballeda (2013), la cartografía social se constituye en un dispositivo metodológico que articula la acción institucional con la experiencia de los sujetos, posibilitando una lectura dialógica del territorio y promoviendo procesos de transformación social desde la base. De esta manera, las políticas públicas dejan de ser únicamente programas administrativos y se convierten en plataformas de encuentro entre Estado y comunidad, donde la juventud emerge como actor social protagónico en la construcción de paz territorial.

El presente artículo tiene como objetivo sistematizar los hallazgos del proceso de cartografía social desarrollado en el municipio de Galapa, articulando el enfoque cualitativo (Martínez, 2003) y la metodología de Investigación-Acción-Participativa (IAP) (Bautista, 2011). Este estudio busca aportar elementos conceptuales y prácticos para la comprensión y prevención de la violencia juvenil en contextos locales, contribuyendo así al fortalecimiento de políticas públicas y programas comunitarios orientados a la construcción de paz territorial.

Método

El estudio se desarrolló desde el enfoque cualitativo y bajo la perspectiva de la Investigación-Acción-Participativa (IAP), con el propósito de comprender y transformar las dinámicas sociales que inciden en la violencia juvenil en el municipio de Galapa. Este enfoque permitió articular la producción de conocimiento con la acción social, favoreciendo procesos de reflexión colectiva y construcción de alternativas desde las comunidades participantes.

Siguiendo a Martínez (2003, 2006), la investigación cualitativa busca comprender la realidad social en su contexto natural, reconociendo las interacciones, significados y estructuras simbólicas que la constituyen. Siguiendo a Martínez (2003, 2006), la investigación cualitativa busca comprender la realidad social en su contexto natural, reconociendo las interacciones, significados y estructuras simbólicas que la constituyen. En esta línea, la Investigación Acción Participativa (IAP) se concibe como un proceso colaborativo en el que los actores sociales no son simplemente objetos de estudio, sino protagonistas activos en la generación de conocimiento, Como señala Bautista, (2011).

> "La búsqueda del conocimiento se entiende como un proceso colectivo, cuyos resultados y la utilización de los mismos son obtenidos por los colectivos sociales, quienes determinan el proceso de conocimiento a la vez que experimentan, en el mismo, un progreso en la maduración colectiva que permite asumir el control de los problemas que los afectan" (p. 94).

La investigación se orientó así a fortalecer la capacidad comunitaria para analizar su propio territorio y promover la transformación de las condiciones que favorecen la violencia juvenil. El proceso se implementó en los barrios Carruajes, Salón Azul, San Francisco, Las Mercedes, Juan Mina, Mundo Feliz y Villa Olímpica, priorizados por el programa Jóvenes por la Paz. A través de la cartografía social se facilitó la identificación de factores de riesgo y de protección, así como la construcción de una lectura compartida del territorio.

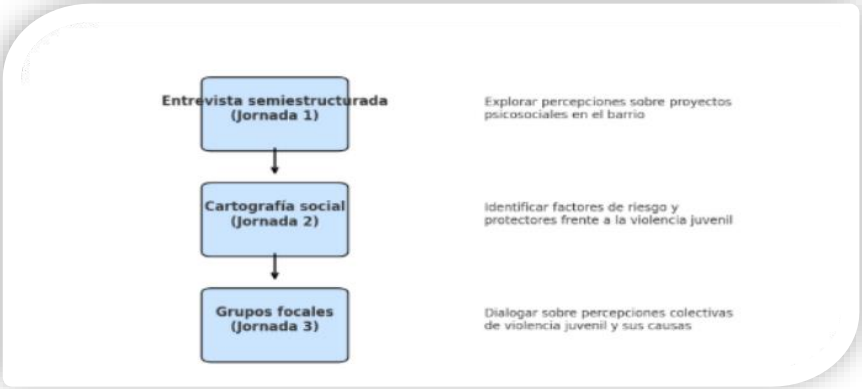
La metodología combinó tres técnicas participativas desarrolladas en igual número de jornadas:

1. Entrevistas semiestructuradas: permitieron explorar las percepciones comunitarias frente a los proyectos psicosociales y las experiencias previas de intervención en los barrios.
2. Cartografía social: posibilitó la elaboración de mapas colectivos que georreferenciaron los espacios de riesgo y de protección, promoviendo la reflexión sobre el significado del territorio y las relaciones sociales que en él se construyen.

3. Grupos focales: fomentaron el diálogo comunitario acerca de las causas, manifestaciones y dinámicas de la violencia juvenil, fortaleciendo la apropiación del conocimiento y la identificación de propuestas de cambio.

Imagen 1.

Diagrama representativo de las tres jornadas de intervención



Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, estas técnicas se desarrollaron en un ambiente de horizontalidad y aprendizaje, donde los facilitadores asumieron un rol mediador, promoviendo el intercambio de saberes entre los distintos actores (jóvenes, líderes, familias e instituciones). En cuanto, a los participantes fueron ciento veintidós (122) habitantes del municipio de Galapa, distribuidos en los siete barrios priorizados. El grupo estuvo conformado por jóvenes, líderes comunitarios y representantes institucionales.

El proceso se llevó a cabo en tres fases:

1. Planeación y convocatoria: mediante reuniones con líderes barriales, invitaciones formales, comunicación digital y visitas domiciliarias.
2. Desarrollo participativo: cada jornada tuvo una duración aproximada de una hora, facilitando la construcción de conocimientos mediante actividades lúdicas, conversatorios y ejercicios de mapeo colectivo.
3. Sistematización y análisis: los datos se consolidaron en matrices y mapas interpretativos, permitiendo identificar patrones comunes de vulnerabilidad y recursos comunitarios.

El desarrollo del proceso se rigió por los principios éticos de la investigación social y la IAP, garantizando el respeto, la transparencia y la protección de los participantes:

Consentimiento informado: antes de cada jornada, los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio, las actividades a realizar, el uso de la información y su derecho a retirarse en cualquier momento. La participación se realizó solo tras su consentimiento verbal y escrito. A continuación, se describen criterios éticos:

Confidencialidad: se preservó la identidad de los participantes mediante el uso de códigos o referencias colectivas. Las imágenes, registros y testimonios fueron utilizados únicamente con fines académicos e institucionales, protegiendo los datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos en Colombia.

Participación voluntaria: la inclusión de los actores comunitarios fue libre y no implicó ningún tipo de compensación económica ni obligación institucional. Se procuró crear ambientes de confianza, respeto y corresponsabilidad, en coherencia con el principio de autonomía de la IAP.

No daño y beneficio mutuo: se cuidó que las dinámicas no generaran re victimización ni exposición innecesaria. La información obtenida fue devuelta a la comunidad en espacios de retroalimentación, asegurando su utilidad social.

De esta manera, la metodología se consolidó como un proceso dialógico, ético y transformador, donde la generación de conocimiento se integró con la acción colectiva para fortalecer la cohesión social, el liderazgo juvenil y la construcción de paz territorial.

Resultados

El proceso de cartografía social permitió construir una lectura colectiva del territorio galapero, reconociendo tanto las condiciones de vulnerabilidad que inciden en la violencia juvenil como las potencialidades que fortalecen la convivencia y la cultura de paz. A través de las tres jornadas participativas desarrolladas en los siete barrios priorizados, se identificaron patrones comunes que trascienden las particularidades locales y configuran una realidad social compartida por amplios sectores juveniles del municipio.

En términos generales, los hallazgos evidencian que la violencia juvenil en Galapa se encuentra asociada a una combinación de factores estructurales, familiares e institucionales. Entre los principales factores de riesgo, los participantes destacaron la fragilidad de los vínculos familiares, las limitadas oportunidades educativas y laborales, la deserción escolar (33,9%) y el consumo de alcohol (50,4%) como prácticas normalizadas en entornos comunitarios. Este último se percibe como un elemento de socialización que, en ausencia de alternativas culturales o recreativas, incrementa la exposición a comportamientos violentos y situaciones de conflicto interpersonal.

El consumo de alcohol está documentado como un fenómeno altamente relacionado con conductas violentas o agresivas, y no debe quedar fuera del análisis, aunque la atención institucional y mediática se derive a menudo hacia el consumo de drogas ilegales. Diversos estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2015) y la OMS (2005) señalan que el alcohol constituye uno de los principales factores de riesgo en términos de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en las Américas. Su vínculo con el delito y la violencia es complejo, pues ambos suelen ser resultados de condicionantes sociales más profundos como las carencias socioeconómicas y afectivas, la falta de oportunidades y la debilidad del acompañamiento familiar, lo que refuerza la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral y preventiva.

A ello se suma la baja presencia institucional en los barrios periféricos, evidenciada en la escasa oferta de programas continuos de prevención y acompañamiento psicosocial. Esta ausencia deja vacíos que son ocupados por dinámicas informales de convivencia, donde la violencia y el consumo se normalizan como formas de relación social. De manera complementaria, la cartografía permitió visibilizar espacios comunitarios estratégicos como parques, iglesias, centros educativos y canchas que funcionan simultáneamente como escenarios de riesgo y de protección. Por ejemplo, mientras algunos de estos espacios fueron señalados por los jóvenes como lugares de consumo y riñas, otros fueron resignificados como puntos de encuentro, liderazgo y participación juvenil. Este hallazgo revela que la significación del territorio no es estática, sino que depende de los procesos de apropiación social impulsados por la comunidad.

En contraste con los riesgos, emergieron factores protectores vinculados a la organización juvenil, la presencia de iglesias y grupos religiosos, y el rol articulador de las instituciones educativas. El liderazgo juvenil, en particular, fue reconocido como una fuerza social capaz de transformar la percepción del territorio y de movilizar acciones de convivencia. Asimismo, se destacó la importancia de las redes de apoyo barrial —como los comités de convivencia y las juntas de acción comunal en la mediación de conflictos y en la generación de espacios seguros para el diálogo.

Desde el punto de vista metodológico, el ejercicio de cartografía social generó productos tangibles de conocimiento colectivo, entre ellos mapas participativos, diagramas de

relaciones y narrativas gráficas, que posibilitaron una comprensión situada del fenómeno. Estas representaciones visuales reflejaron zonas de alta concentración de conflictos, rutas de desplazamiento de los jóvenes y territorios simbólicos asociados a la identidad comunitaria. En conjunto, los resultados configuran un diagnóstico social que trasciende la descripción estadística y se orienta hacia la acción transformadora del territorio.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos confirman que la violencia juvenil en Galapa no puede entenderse como un fenómeno aislado o meramente conductual, sino como una expresión de procesos estructurales de desigualdad, exclusión y desarticulación institucional, en coherencia con lo planteado por Aguilar-Forero y Muñoz González (2015). Los hallazgos también se corresponden con lo expuesto por el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 (PNUD), que identifica a los jóvenes —en especial a los hombres de contextos urbanos empobrecidos— como uno de los grupos más expuestos a la violencia letal en América Latina y el Caribe. Esta coincidencia refuerza la idea de que las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión inciden directamente en la configuración la violencia juvenil en territorios como Galapa. Esta comprensión coincide con la lectura territorial propuesta por Carballeda (2013), quien sostiene que intervenir en lo social implica dialogar con el sujeto en su contexto histórico y cultural.

El análisis de los factores de riesgo evidencia la necesidad de abordar la prevención desde un enfoque sistémico-ecológico, reconociendo la interdependencia entre las dimensiones familiar, comunitaria e institucional. La deserción escolar y el consumo de alcohol, más que comportamientos individuales, reflejan vacíos estructurales en la oferta educativa y recreativa del territorio, así como una débil presencia estatal sostenida. En este sentido, el fortalecimiento de la política pública de juventud debe ir más allá de la atención asistencial y orientarse hacia la generación de oportunidades reales de participación, formación y empleo digno.

Asimismo, la cartografía social demostró ser un dispositivo metodológico y político capaz de articular conocimiento local e institucional. Al propiciar espacios de diálogo entre jóvenes, líderes y funcionarios, la IAP favoreció la emergencia de nuevas formas de agencia comunitaria, en las cuales los participantes no son receptores pasivos de programas, sino coautores de las soluciones.

En coherencia con las políticas de "Paz Total" y con el programa "Jóvenes por la Paz" implementado por la Secretaría de Gobierno de Galapa, así como con los lineamientos del Programa Nacional Jóvenes en Paz, los hallazgos sugieren que la prevención de la violencia juvenil requiere una articulación efectiva entre Estado y comunidad. Cabe resaltar que, según las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, en su eje transversal "Actores diferenciales para el cambio", la estrategia 6 denominada "Jóvenes con derechos que lideran las transformaciones para la vida", en su objetivo 3 "Juventudes artífices de la Paz Total", establece la implementación del Programa Nacional Jóvenes en Paz, dirigido a las juventudes en condición de pobreza, vulnerabilidad y en riesgo de vincularse a dinámicas de violencia y criminalidad, mediante componentes educativos, de corresponsabilidad y de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario, con el fin de generar entornos protectores y reducir los índices de violencia (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023).

En este contexto, la Alcaldía de Galapa se muestra asertiva en la implementación de estas políticas nacionales, adaptando los lineamientos del programa a las particularidades del territorio, fortaleciendo las redes juveniles locales y promoviendo espacios de corresponsabilidad institucional. El liderazgo juvenil identificado en los barrios representa una oportunidad estratégica para construir puentes entre la acción comunitaria y las políticas públicas, avanzando hacia una gobernanza territorial participativa y sostenible.

La experiencia de Galapa pone de relieve que la cartografía social no solo es una técnica de diagnóstico, sino un proceso formativo y transformador. Al visibilizar las tensiones y

potencialidades del territorio, promueve una lectura crítica de la realidad y estimula la construcción colectiva de alternativas. Este carácter reflexivo y emancipador convierte la cartografía en un instrumento esencial para la intervención social situada, donde la comprensión del territorio se traduce en acción social orientada al fortalecimiento del tejido comunitario y la construcción de paz territorial.

La reflexión derivada de este estudio permite comprender la violencia juvenil en Galapa como un fenómeno complejo que trasciende los comportamientos individuales y refleja las tensiones estructurales, sociales e institucionales del territorio. La investigación, apoyada en los principios de la investigación-acción-participativa, evidencia que la transformación de estas dinámicas solo es posible cuando la comunidad se reconoce como parte activa en la construcción de soluciones. Desde una lectura teórica y contextual, los hallazgos subrayan que la violencia juvenil está íntimamente relacionada con la fragilidad de los vínculos sociales, la desigualdad en el acceso a oportunidades y la débil articulación entre familia, escuela e instituciones del Estado.

Más que describir el problema, el proceso permitió identificar los puntos de encuentro entre la percepción comunitaria y las acciones institucionales, revelando tanto los desafíos como las potencialidades del territorio. El ejercicio de cartografía social se consolida como un recurso metodológico significativo que no solo facilita la comprensión del entorno, sino que promueve procesos de empoderamiento y cohesión social. Esta herramienta posibilita que la comunidad interprete su realidad, reconozca los factores de riesgo y construya colectivamente alternativas de convivencia y paz. Su valor radica en generar conocimiento situado y en abrir espacios de diálogo entre saberes académicos y comunitarios.

En cuanto a sus alcances, la investigación contribuye a fortalecer la comprensión de la violencia juvenil desde una perspectiva territorial y participativa, aportando insumos útiles para la planeación de políticas públicas locales. No obstante, se reconocen limitaciones relacionadas con la cobertura y la necesidad de incluir una mayor diversidad de actores para enriquecer el análisis. De esta experiencia se derivan posibles líneas de investigación orientadas a evaluar el impacto de los programas de prevención juvenil, explorar la relación entre violencia, salud mental y consumo de sustancias, y analizar la sostenibilidad de los procesos participativos a largo plazo. Más allá de los resultados específicos, este estudio reafirma la importancia de generar conocimiento colaborativo que inspire acciones concretas hacia la convivencia, la equidad y la construcción de paz territorial.

Referencias

Alcaldía Municipal de Galapa (Atlántico). (2024). Plan de desarrollo territorial "Galapa, tierra de esperanza 2024-2027. Galapa: Alcaldía Municipal: https://www.galapa-atlantico.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%20Territorial%20-%20%20Galapa%20Tierra%20de%20la%20Esperanza%202024-2027.pdf

Aguilar-Forero, N., & Muñoz González, J. (2015). La condición juvenil en contextos de exclusión social. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2), 1017–1032.

Bautista, N. P. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: epistemología, metodología y aplicaciones. Manual Moderno.

Congreso de la República de Colombia. (2012, octubre 17). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales* (Diario Oficial No. 48.464). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Carballeda, A. (2013). La intervención en lo social: exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: Paidós.

Departamento Nacional de Planeación. (2023). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida. Gobierno de Colombia.

Gobernación del Atlántico. (2024). Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027: Atlántico para el Mundo. Recuperado de https://www.atlantico.gov.co/images/stories/plan_inversiones/PPIVF_2024_05_03_PD_2024-2027.pdf

Martínez, M. (2003). La investigación cualitativa etnográfica en educación. México: Trillas.

Martínez, M. (2006). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Trillas.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2005). Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas. Ginebra: OMS.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2015). Violencia interpersonal en América Latina y el Caribe: un análisis regional. Washington, D.C.: OPS.

Organización Panamericana de la Salud (OPS) & Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Informe mundial sobre violencia y salud pública. Washington, D.C.: OPS.

Pérez Espitia, M. (2019). *Juventudes rurales en Colombia: Entre la exclusión vergonzante y la tutela incluyente*. **Criterios**, *11*(2), 22. https://revistas.usb.edu.co/index.php/criterios/article/view/4068/3303

Presidencia de la República de Colombia; Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia, potencia mundial de la vida (Bases del PND y Plan de inversiones). Ley 2294 de 2023. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Informe Regional de Desarrollo Humano 2021: Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. PNUD. https://files.acquia.undp.org/public/migration/latinamerica/undp-rblac-IRDH-PNUD_C04-ES.pdf

Secretaría de Gobierno de Galapa. (2025). Informe general de cartografía social "Jóvenes por la Paz". Alcaldía Municipal de Galapa.